

La elección se adelanta, el magisterio reabre la disputa y el IMSS pierde patrones: tres alertas que México no puede ignorar

México comenzó a moverse rumbo a 2027 antes de que las autoridades electorales definan cómo regular la competencia anticipada. Morena conserva ventaja, pero sus aspirantes y aliados ya disputan candidaturas en estados clave; el Gobierno prepara una consulta nacional para reemplazar a la cuestionada Usicamm; y el IMSS enfrenta una señal preocupante: aunque aumenta el número de trabajadores afiliados, el registro de empleadores cayó a su nivel más bajo en cinco años. La política, el trabajo y la seguridad social avanzan al mismo tiempo, pero no necesariamente en la misma dirección.

La elección de 2027 ya comenzó, aunque todavía no exista una fecha oficial de arranque. Aspirantes, dirigentes y partidos recorren estados, encabezan reuniones, construyen alianzas y fortalecen estructuras bajo distintas denominaciones. Unos aseguran que se trata de actividades internas o de organización territorial; sus adversarios sostienen que son campañas anticipadas. Entre ambas versiones existe un vacío que las autoridades electorales todavía no logran cerrar con claridad. La consejera del INE Carla Humphrey explicó que el Instituto mantiene verificadores en los actos públicos y registra los gastos realizados, pero que corresponde a los organismos electorales estatales determinar si esas actividades constituyen actos anticipados de precampaña o campaña para las gubernaturas. En otras palabras, el INE fiscaliza, los institutos locales califican y el Tribunal Electoral revisa. En el papel, la distribución de competencias parece ordenada; en la práctica, puede convertirse en una carrera de relevos donde todos reciben el expediente y nadie llega a tiempo.

Mientras las autoridades deciden quién debe sancionar, los aspirantes continúan acumulando exposición pública, redes de apoyo, compromisos territoriales y presencia mediática. Si meses después una autoridad concluye que existió una irregularidad, la ventaja política ya estará construida. Ese es el problema de fondo: las reglas comienzan en una fecha, pero la competencia real inició mucho antes. Los nuevos partidos PAZ y Somos México llegaron al Consejo General del INE precisamente con ese reclamo. Ambas fuerzas deberán competir sin la estructura acumulada de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT o Movimiento Ciudadano. Apenas comienzan a formar comités, instalar representaciones y buscar candidaturas, mientras los partidos consolidados llevan meses posicionando nombres. PAZ se presenta como una opción de reconciliación y seguridad; Somos México afirma que pretende reconstruir instituciones democráticas y atraer a ciudadanos sin identificación partidista. El reto será demostrar que representan proyectos nuevos y no sólo el reciclaje de antiguos cuadros. En el caso de PAZ, además, la presencia de Hugo Eric Flores genera una pregunta política inevitable, pues rindió protesta como representante suplente del nuevo partido mientras continúa como diputado federal de Morena. La dualidad

puede tener explicación legal, pero proyecta dudas sobre el grado real de independencia de la nueva fuerza.

Mientras los nuevos partidos buscan espacio, Morena conserva una ventaja considerable en estados como Guerrero. Una encuesta publicada este martes coloca al partido con 51% de las preferencias, muy por encima del PRI, que registra 13%; el PAN, con 6%; y Movimiento Ciudadano, con 5%. La oposición aparece lejos, pero la competencia interna se estrecha. Beatriz Mojica encabeza las preferencias dentro de Morena con 20%, seguida por Esthela Damián con 15%. La diferencia de cinco puntos confirma que la batalla principal puede ocurrir dentro del propio partido antes de llegar a las urnas. La lógica es sencilla: cuando una organización aparece con amplia ventaja, obtener la candidatura puede ser casi tan importante como ganar la elección. Eso incrementa presiones, activa grupos internos y eleva el precio de cada decisión. La dirigencia nacional tendrá que demostrar que sus encuestas son confiables, que los perfiles fueron revisados, que se respetó la paridad y que quienes no resulten favorecidos tendrán espacio dentro del proyecto. Una candidatura mal procesada puede convertir una ventaja electoral en una fractura territorial.

Chihuahua ofrece el ejemplo más visible de esta tensión. El Partido Verde respalda al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, mientras sectores del Partido del Trabajo impulsan a Andrea Chávez. La senadora con licencia, además, fue designada coordinadora estatal de afiliación, una posición que fortalece su presencia territorial y su vínculo con la estructura partidista. La coalición gobernante conserva fuerza, pero ya no se mueve bajo una sola dirección. El Verde y el PT buscan convertir su peso legislativo, territorial y electoral en candidaturas concretas, mientras Morena debe decidir hasta dónde ceder sin perder el control de sus procesos internos. San Luis Potosí presenta una tensión semejante. El gobernador Ricardo Gallardo fortalece la promoción de su esposa, la senadora Ruth González, en una estrategia orientada a conservar el control estatal para el PVEM. El movimiento puede chocar con las aspiraciones de Morena y con el creciente cuestionamiento al nepotismo político. La sucesión apenas comienza y la alianza ya está estirando la liga.

Pero la agenda nacional no se limita a la competencia partidista. El Gobierno federal se prepara para abrir otro frente de alto impacto con la desaparición de la Usicamm. La Secretaría de Educación Pública anunció que, a partir del 24 de agosto, consultará escuela por escuela a maestras y maestros sobre el organismo que deberá reemplazarla. La Usicamm administra procesos fundamentales para la vida laboral docente, como ingreso, promoción, cambios de centro de trabajo, reconocimiento y movilidad. Durante años acumuló críticas por burocracia, errores, falta de transparencia y procedimientos percibidos como injustos. La CNTE exige su desaparición y otros sectores del magisterio coinciden, pero el consenso termina ahí. El verdadero conflicto comenzará cuando se discuta qué

modelo la sustituirá, cuánto pesarán la antigüedad y la evaluación, cómo se reconocerá la experiencia, qué papel tendrán los sindicatos, qué mecanismos de impugnación existirán y cómo se atenderán las diferencias entre zonas urbanas, rurales e indígenas. Cambiar el nombre sin resolver estas preguntas sólo produciría una Usicamm con logotipo nuevo.

La consulta directa tiene una ventaja: permite escuchar a quienes están frente a grupo y no únicamente a las dirigencias sindicales. Sin embargo, también contiene un riesgo. Si las organizaciones gremiales interpretan el proceso como un intento de debilitar su representación, la consulta puede transformarse en un nuevo foco de movilización. La reforma necesitará dos legitimidades: la de las bases y la de la negociación colectiva. A ello se suma el expediente pensionario, que continúa abierto. La convocatoria a una asamblea nacional de trabajadores para exigir pensiones dignas muestra que la inconformidad no se limita a la CNTE. Diversas organizaciones cuestionan el sistema de cuentas individuales y advierten que las próximas generaciones podrían recibir pensiones insuficientes. El Gobierno enfrenta una ecuación compleja: mejorar las condiciones de retiro sin comprometer la estabilidad financiera del ISSSTE, el IMSS y las finanzas públicas. Una solución exclusivamente política puede crear obligaciones imposibles de sostener; una respuesta solamente contable puede ignorar el deterioro real de los derechos laborales.

Mientras política y sindicalismo aceleran, el IMSS presenta una fotografía contradictoria. Por una parte, el Instituto cerró junio con 22 millones 779 mil 704 trabajadores afiliados. Durante el primer semestre se incorporaron más de 262 mil puestos y el crecimiento anual alcanzó 2%. La incorporación de personas trabajadoras de plataformas digitales amplió la cobertura de seguridad social y representa un avance relevante en formalización, aunque una parte del incremento corresponde a relaciones laborales que ya existían y apenas ingresaron al registro, no necesariamente a puestos de nueva creación. Por otra parte, el número de patrones registrados continúa cayendo. En junio había un millón 15 mil 100 empleadores, 26 mil 536 menos que un año antes. La reducción anual fue de 2.55% y ya acumula 24 meses consecutivos. Desde noviembre de 2023 se han perdido 62 mil 783 registros patronales, lo que coloca el indicador en su nivel más bajo de cinco años.

El dato merece atención porque la seguridad social no se financia únicamente con trabajadores afiliados. Necesita empresas formales, salarios correctamente registrados y relaciones laborales estables. Una empresa que cierra deja de pagar cuotas; una empresa que migra a la informalidad puede conservar su actividad, pero deja a sus trabajadores sin protección; y una empresa que subdeclara salarios reduce los ingresos del Instituto y también las futuras prestaciones de su personal. La caída patronal puede tener varias causas: cierre de pequeños negocios, desaceleración económica, concentración empresarial, informalidad o evasión. Cada causa requiere una respuesta distinta. El Gobierno no puede corregir un cierre empresarial con una auditoría ni resolver una evasión

con un subsidio. Primero necesita identificar qué está ocurriendo, en qué sectores se concentran las bajas y qué tipo de empresas están saliendo del registro.

Los salarios también envían una señal de moderación. Durante el primer semestre, el salario real de los trabajadores afiliados al IMSS creció 2.8%, el menor avance desde 2022 para un periodo semejante. La remuneración todavía aumenta por encima de la inflación y la masa salarial conserva dinamismo, pero la pérdida de velocidad puede reflejar una menor capacidad empresarial para otorgar incrementos. La seguridad social enfrenta entonces una ecuación más compleja de lo que muestran los titulares: hay más afiliados, pero menos patrones; los salarios crecen, pero más lentamente; y la formalización avanza, aunque una parte importante corresponde a trabajadores que ya laboraban y apenas ingresaron a la estadística. Nada de esto invalida los avances, pero obliga a dejar de leer un solo indicador.

La jornada deja tres alertas claras. La primera está en las elecciones: la competencia comenzó antes de que existan reglas eficaces para contenerla. La segunda está en el sindicalismo: reemplazar la Usicamm abrirá una disputa sobre plazas, derechos, antigüedad y representación. La tercera está en el IMSS: el crecimiento de afiliados no garantiza sostenibilidad si continúa reduciéndose la base empresarial. Los tres asuntos parecen separados, pero comparten una misma exigencia: anticipación. Las autoridades electorales deben actuar antes de que las ventajas sean irreversibles; la SEP debe acordar el nuevo modelo antes de que la consulta se convierta en conflicto; y el IMSS debe comprender por qué desaparecen patrones antes de que la caída afecte de manera profunda la recaudación y el empleo formal.

El problema no es que México carezca de información. Las señales están sobre la mesa. La verdadera pregunta es si las instituciones actuarán cuando todavía pueden prevenir o esperarán hasta que sólo quede administrar la crisis.